



La salvaguarda del patrimonio inmaterial como acuerdo social

Propuesta metodológica para la
elaboración de planes colaborativos
de salvaguarda del PCI



Junta de Andalucía

Consejería de Cultura
y Patrimonio Histórico

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

CONSEJERÍA DE CULTURA
Y PATRIMONIO HISTÓRICO

Consejera de Cultura y
Patrimonio Histórico
Patricia del Pozo Fernández

Viceconsejera de Cultura y
Patrimonio Histórico
María Esperanza O'Neill Orueta

Secretario General de
Patrimonio Cultural
Juan Cristóbal Jurado Vela

Director General de Patrimonio
Histórico y Documental
Miguel Ángel Araúz

Director del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico (IAPH)
Juan José Primo Jurado

Edita: Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico.
Junta de Andalucía

Proyecto financiado por el Mi-
nisterio de Cultura y Deporte,
Gobierno de España, con cargo
a las ayudas, en régimen de
concurcencia competitiva, para
proyectos de salvaguarda del
Patrimonio Cultural Inmaterial
correspondientes al año 2019

© de la edición:
Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico.
Junta de Andalucía

Coordinación de la edición:
Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico

COORDINACIÓN CIENTÍFICA
Gema Carrera Díaz, IAPH

AUTORÍA
Rívia Ryker Bandeira de Alencar
Gema Carrera Díaz
Eva Cote Montes
Cristina Cruces Roldán
Aniceto Delgado Méndez
Isabel Durán Salado
David Florido del Corral
Andrés Forero Rueda
Carlos García Bayona
Ana María García López
Sara González Cambeiro
Cristina Isla Palma
Luis Pablo Martínez Sanmartín
Mónica Ortiz Sánchez
Teresa Pacheco Albino
Fuensanta Plata García
Victoria Quintero Morón
Cristina Sánchez Carretero
Ana Saraiva
María Pía Timón Tiemblo

EQUIPO EDITORIAL IAPH
María Cuéllar Gordillo, Cinta
Delgado Soler, Carmen Guerrero
Quintero

APOYO EDITORIAL
Deculturas S. Coop. And.

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Manolo García nz



Esta obra está bajo una licencia
Reconocimiento-NoComercial-
SinObraDerivada 3.0 España
Creative Commons.
Usted es libre de copiar, distribuir
y comunicar públicamente
la obra bajo las condiciones
siguientes:
– Reconocimiento. Debe
reconocer los
créditos de la obra de la manera
especificada por el autor o el
licenciador.
– No comercial. No puede utilizar
esta obra para fines comerciales.
– Sin obras derivadas. No se
puede alterar, transformar o
generar una obra derivada a
partir de esta obra.
Al reutilizar o distribuir la obra,
tiene que dejar bien claro los
términos de la licencia de
esta obra. Alguna de estas
condiciones puede no aplicarse
si se obtiene el permiso del
titular de los derechos de autor.
Los derechos derivados de usos
legítimos u otras limitaciones
reconocidas por ley no se ven
afectados por lo anterior.
La licencia completa está
disponible en:
[http://creativecommons.org/
licenses/bync-nd/3.0/es/](http://creativecommons.org/licenses/bync-nd/3.0/es/)

AÑO DE EDICIÓN: 2021
ISBN: 978-84-9959-395-1

La salvaguarda del patrimonio inmaterial como acuerdo social

Propuesta metodológica para la
elaboración de planes colaborativos
de salvaguarda del PCI

Presentación

Casi desde sus inicios, ya en la década de los 90 del siglo XX, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, incorporó, en su Centro de Documentación y Estudios, la perspectiva antropológica en las labores técnicas e investigadoras sobre patrimonio, labor que se hizo especialmente fructífera a partir de la *Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial* de UNESCO (París, 2003).

Así, la elaboración del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía (2008-2014) constituyó para la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y para el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España una de las grandes aportaciones metodológicas realizadas por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en el ámbito del conocimiento y salvaguarda de este patrimonio, incorporándose su propuesta metodológica al Plan Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial aprobado por el Consejo de Patrimonio Histórico en 2011.

En la misma línea, la reciente creación de la Red de Agentes Informantes del patrimonio cultural de Andalucía (IAPH, 2020) garantiza la continuidad y actualización participativa de este instrumento de conocimiento que aporta al patrimonio cultural de Andalucía más de 1800 expresiones culturales difundidas a través de los más variados medios de difusión, incluyendo las dos principales herramientas fundamentales de difusión y publicación de los trabajos realizados en el Centro de Documentación y Estudios: la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía y el Repositorio de Activos Digitales.

Por otra parte, uno de los objetivos del Atlas es detectar los riesgos y problemáticas que afectan a estas actividades con la intención de poner en marcha posibles planes de salvaguarda que exigen una coordinación entre

los protagonistas de este patrimonio, la ciudadanía y un marco institucional articulado. La evolución lógica de este proyecto, siguiendo la trayectoria desarrollada en el IAPH sobre el patrimonio inmaterial desde la antropología social, ha sido la de profundizar en el diseño colaborativo de planes de salvaguarda.

Con esta intención, el IAPH formuló el proyecto PES PCI: Guía metodológica para el diseño de Planes Especiales de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, cofinanciado por el Ministerio de Cultura y Deporte, cuyos resultados se muestran en la presente monografía. Conscientes de que la salvaguarda del patrimonio inmaterial depende de una gran variedad de actores sociales y de la coordinación de todos ellos, esta obra colectiva pretende sentar las bases metodológicas con el soporte técnico, conocimientos y agentes necesarios.

Por tanto, me complace presentar esta publicación, cuyo objetivo final es dotar a la administración cultural y a la sociedad de una herramienta versátil y exportable a distintos ámbitos patrimoniales y territoriales que garanticen el necesario acuerdo social e institucional para la salvaguarda de las manifestaciones y expresiones del patrimonio cultural inmaterial, contribuyendo así a la diversidad cultural y al desarrollo sostenible, inclusivo, equitativo y estable, especialmente en Andalucía.

Índice

p. 09

Introducción

Puntos de partida y estructura de la propuesta metodológica de los planes de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial como un acuerdo social

Gema Carrera Díaz

SESIÓN 1. LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

p. 19

Capítulo 1

Medio siglo y una normativa internacional de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial: entre la diversidad cultural y el “mercado”

Gema Carrera Díaz

p. 52

Capítulo 2

Los planes de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en Brasil

Rívia Ryker Bandeira de Alencar

p. 75

Capítulo 3

Los Planes Especiales de Salvaguardia y las metodologías participativas para la gestión del patrimonio cultural inmaterial en Colombia

Ana María García López,
Andrés Forero Rueda

p. 94

Capítulo 4

El inventario del patrimonio cultural inmaterial en Portugal: retrospectiva y retos para su conservación

Teresa Pacheco Albino,
Ana Saraiva

SESIÓN 2. LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN EL ÁMBITO ESTATAL Y AUTONÓMICO EN EL ESTADO ESPAÑOL

p. 111

Capítulo 5

La salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en España. Una visión desde la legislación estatal

Mónica Ortiz Sánchez

p. 132

Capítulo 6

El Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial: una metodología compartida

María Pía Timón Tiemblo,
Sara González Cambeiro

p. 150

Capítulo 7

Aproximación al análisis comparado de las medidas de salvaguardia del PCI en la legislación autonómica española

Luis Pablo Martínez Sanmartín

SESIÓN 3. LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN ANDALUCÍA

p. 171

Capítulo 8

Las inscripciones del patrimonio cultural inmaterial en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Alcance y cauces de participación social para su salvaguarda

Fuensanta Plata García

p. 195

Capítulo 9

El inventario como instrumento de salvaguarda. El Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía. “Un viaje de ida y vuelta”

Gema Carrera Díaz

p. 228

Capítulo 10

El patrimonio cultural inmaterial de Andalucía en las listas de la UNESCO. Una mirada retrospectiva

Cristina Cruces Roldán

p. 249

Capítulo 11

Catálogo de riesgos, medidas y buenas prácticas en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial

Eva Cote Montes,
Cristina Isla Palma

SESIÓN 4. DISEÑO DE UNA PROPUESTA METODOLÓGICA COLABORATIVA DE PLAN DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

p. 280

Capítulo 12

¿Qué debe ser un plan de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial?

Gema Carrera Díaz,
Fuensanta Plata García

p. 301

Capítulo 13

La salvaguarda del PCI: trenzando acompañamiento etnográfico y procesos participativos

Victoria Quintero-Morón,
Cristina Sánchez-Carretero

p. 317

Capítulo 14

Todas las voces. La elaboración de mapas de actores para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial

David Florido del Corral

p. 336

Capítulo 15

La documentación gráfica, sonora y audiovisual en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial

Aniceto Delgado Méndez

p. 356

Capítulo 16

Participación y gestión patrimonial en el IAPH: un taller participativo sobre el alcance de un plan especial de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial

Isabel Durán Salado

p. 368

Referencias bibliográficas y fuentes documentales

p. 414

Carta de Andalucía para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial





Capítulo 8

Las inscripciones del patrimonio cultural inmaterial en el Catalogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Alcance y cauces de participación social para su salvaguarda

Fuensanta Plata García, Departamento de Catalogación e Inventario del Patrimonio Histórico, Servicio de Protección, Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico

1. Los instrumentos legales

Con el término de *actividades de interés etnológico*, desde 1991, la legislación andaluza denomina a todo el universo inmaterial del patrimonio cultural, es decir, a los elementos no tangibles de las formas de vida específicas, diferenciales e identitarias del pueblo andaluz.

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA), redactada al mismo tiempo que el Estado español ratificaba la Convención de 2003, no incorporó los amplios contenidos del documento internacional, aunque recoge, en el artículo 61.2, el concepto de *ámbito*. Vinculado a las actividades de interés etnológico, este espacio físico puede ser delimitado e incorporado al planeamiento urbanístico con el fin de propiciar el desarrollo del patrimonio intangible: caminos, itinerarios de procesiones, puntos de reunión o sociabilidad, sitios donde se realizan actividades productivas, etc., son exponentes de dichos lugares. Asimismo, también se incorpora como novedad la posibilidad de aplicación de todas las medidas de tutela a las formas y elementos inmateriales que la norma recoge, aunque no se han perfilado ni adaptado a las características específicas de estos bienes, sobreviviendo las medidas y acciones enfocadas a la parte material del patrimonio.

En el artículo 7 de la mencionada LPHA se recoge que el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA) comprenderá los bienes de interés cultural, los de catalogación general, y los incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del patrimonio histórico español. De las tres figuras de protección solo son aplicables a los bienes del patrimonio inmaterial las dos primeras, dado que el Inventario General está reservado a bienes muebles exclusivamente. Dentro de la máxima categoría, es decir, la de bienes de interés cultural, en el caso de inmuebles, se determina una figura específica para los bienes de naturaleza inmueble de valor etnológico, la de lugares de interés etnológico. Además de esta figura propia, la legislación andaluza regula, para los bienes inmuebles, otras modalidades que también abarcan, a la luz de sus definiciones, a los bienes de carácter o valores etnológicos. Nos referimos a monumentos, conjuntos históricos, jardines históricos, sitios históricos, lugares de interés industrial y zonas patrimoniales. En todos los casos citados, formando parte del expediente de inscripción de inmuebles, se pueden inscribir y declarar, en el mismo acto, los bienes inmateriales,

bajo la denominación de actividades de interés etnológico, vinculadas o relacionadas con los inmuebles declarados, además de ser posible señalar un ámbito de desarrollo y la declaración de los bienes muebles, asimismo, vinculados por su íntima relación. En este sentido, el instrumento de las instrucciones particulares, concebido solo para los BIC, permite determinar de forma mucho más adecuada e individualizada las consideraciones y actuaciones de diversa índole para los bienes, con el fin de proteger y establecer medidas de salvaguarda de toda índole.

Las actividades de interés etnológico, además, pueden ser inscritas de forma individual, tanto como bienes de interés cultural, como en la modalidad de bienes de catalogación general. En todos los casos, los ámbitos o espacios de desarrollo que se vinculen gozan de igual categoría de inscripción que los

Romería de la Virgen de La Cabeza, Andújar, Jaén. Detalle de la Procesión
(Marc Ballester i Torrents, [Fondo Gráfico IAPH](#))



bienes catalogados a los que se relacionan, aunque solo en las inscripciones de los BIC se pueden vincular, además, inmuebles y muebles, acto que no contempla la Ley en los expedientes de Catalogación General. Tampoco en el caso de esa última figura se pueden redactar instrucciones particulares, por lo que los elementos del patrimonio inmaterial inscritos con esta última modalidad carecen de la posibilidad de ser dotados de medidas de salvaguarda. Respecto al régimen de autorizaciones para intervenciones, obras, etc., dadas las características de las actividades de interés etnológico, frecuentemente, se aplica al ámbito de desarrollo y a los bienes muebles y espacios vinculados, como en el caso de la Romería de la Virgen de la Cabeza¹, cuyo ámbito ocupa el recorrido de la Romería por Andújar y el camino a la Sierra, incluyendo, además, la imagen de la Virgen de la Cabeza y otros enseres, tal y como veremos.

Por todo ello, podemos concluir que la normativa andaluza actual parte de contenidos e instrumentos más adaptados e idóneos para las formas materiales del patrimonio, siendo más difícil su aplicación plena a los bienes de naturaleza inmaterial, por lo que es necesaria una reforma en este sentido que apuntamos para que se puedan desarrollar medidas específicas de salvaguarda.

2. Los escasos cauces para la participación social

Los procedimientos para la inscripción en el Catálogo General se inician siempre de oficio. La potestad para iniciar los distintos tipos de tramitaciones radica en la persona titular de la dirección general competente en materia de patrimonio histórico, aunque pueden ser solicitadas por personas a título individual, entidades, Ayuntamientos, etc. Estas últimas entidades son las principales demandantes de protección para la inscripción de bienes. También son frecuentes las propuestas procedentes del Parlamento Andaluz.

Una vez tomada la decisión política de acometer la inscripción, debe ser redactada la documentación técnica justificativa de valores del bien a proteger. Al estar los plazos tasados², es difícil terminar en tiempo y forma sin tener preparada dicha justificación de valores, especialmente en los casos de actividades etnológicas, sometidas a temporalidad o estacionalidad. Para

la redacción de dichos informes se cuenta con personas especialistas en antropología, dado que se requiere trabajo de campo y el contacto y participación de las personas, grupos y entidades protagonistas. Igualmente, se procede en un expediente de BIC inmueble que incluya una actividad. Es en ese momento procedimental cuando cabe formular las instrucciones particulares, instrumento enfocado hacia el patrimonio material en un principio, pero donde cabe la inclusión de medidas de salvaguarda, hasta que en una renovación legislativa se incluyan las especificidades del patrimonio inmaterial.

Las resoluciones de incoación son publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y comunicadas, en el caso de los BIC, al Ministerio de Cultura y, en todo caso, a la Delegación Territorial donde radica el bien. Dicha entidad es quien tramita la instrucción del procedimiento, comunicando a personas y organismos interesados el acto incoado, para, posteriormente, recabar informe de institución consultiva, generalmente emitido por la Comisión Provincial de Patrimonio, órgano que carece, normalmente, de especialistas en etnología. Tampoco han tenido cabida en estos órganos asociaciones *patrimonialistas* o grupos formales o informales, representativos y/o protagonistas del patrimonio, salvo en casos puntuales.

La publicación de la información pública del procedimiento en el BOJA, con el fin de que pueda examinar el expediente cualquier persona u organismo, es el siguiente hito del expediente de inscripción. Posteriormente, se da audiencia a Ayuntamientos e *interesados*. Finalmente, se resuelve el expediente por la persona titular de la Consejería en el caso de Catalogación General o, en el supuesto de BIC, por el Consejo de Gobierno.

Actualmente, en relación a las catalogaciones de bienes, solo existen, como cauces de participación social, de forma reglada, la posibilidad de formular solicitudes de protección; además del trámite de información pública, que ahora se anuncia, a la vez que en el BOJA, en las páginas de la Junta de Andalucía para el seguimiento de la ciudadanía de las tramitaciones³, y, en caso de ser propietario o poseedor, con la condición de persona *interesada*.

La legislación andaluza vigente, en este extremo, como en otros muchos, tal y como venimos expresando, está prevista para el patrimonio material. Sin embargo, en relación a los bienes culturales inmateriales, que pertenecen e

identifican a colectivos y grupos, formales e informales, de los que no existen, de forma habitual, registros formalizados, no es fácil su identificación, al menos en su totalidad, dando como resultado que no se pueden ejercer derechos o la condición de persona o entidad interesada⁴. En este sentido, hemos de reconocer, junto con Carrera Díaz (2009, 186) y Quintero-Morón y Sánchez-Carretero (2017, 54 y ss.), que en el caso de los protagonistas o portadores del patrimonio inmaterial se presenta un problema complejo, dado que hay que determinar de forma eficaz a quién o quiénes se deben considerar personas o grupos *interesados*, siendo muy plurales y amplios los entes con esa condición.

Además, como en el resto del patrimonio, en estos bienes concurren personas, grupos y entidades, además de las distintas Administraciones, que presentan intereses contrapuestos, difíciles de solventar de forma ecuaníme y objetiva, pero siempre, con más información, conocimiento y participación, habrá mejores perspectivas para resolver conflictos y tomar decisiones, existiendo, asimismo, en la actualidad medios tecnológicos accesibles para el ejercicio de la participación.

Podemos concluir que la participación de los grupos portadores y protagonistas del patrimonio cultural inmaterial, tanto en los procedimientos administrativos como en la toma de decisiones acerca de las necesidades y medidas de salvaguarda de los elementos, está lejos de ser eficaz y real, no existiendo cauces en la legislación cultural⁵ en ese sentido.

Por otra parte, al examinar la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía, encontramos que no se alude expresamente al patrimonio cultural ni a la cultura andaluza como objeto de los procedimientos de participación. No obstante, entendemos que está concebida como ley marco, alcanzando tanto al ámbito autonómico andaluz como al local, por lo que debe ser implementada en las leyes sectoriales. Aunque, según se desprende del artículo 14 de la ley referenciada, la capacidad de decisión última de celebrar los procesos participativos queda reservada a la Administración, por lo que su eficacia es, para empezar, bastante discutible. Otro aspecto negativo que cabe señalar es el elevado número de firmas necesarias para el inicio de los procesos de participación —entre 20.000 y 30.000, según recogen los artículos 20, 27, 45 y 48 de la Ley de Participación andaluza—, además de la complejidad en sí que presentan las respectivas



Mujeres de Lebrija, Sevilla, bailando en el patio de la Casa del Pumarejo, un lugar de sociabilidad (Francisco José García Espina)

tramitaciones de las iniciativas, siendo, consecuentemente, muy escasos los procedimientos participativos desarrollados hasta el momento al amparo de esta normativa y nula su influencia o implementación en procedimientos de la administración patrimonial.

3. Alcance de las inscripciones del Catálogo General y de sus medidas de salvaguarda

3.1. Actividades relacionadas con el flamenco

Estas inscripciones responden a una solicitud genérica del Instituto del Flamenco de Andalucía para reforzar la declaración de la UNESCO de este

elemento, salvaguardando, mediante la documentación, preservación y visualización, determinados elementos constitutivos o muy relacionados con la expresión declarada.

Inicia este grupo la inscripción de la Fiesta de Verdiales de los Montes de Málaga, realizada en 2010, mediante el Decreto 453/2010, de 21 de diciembre, incluyendo las modalidades de verdiales de Málaga, Almogía, Álora, Antequera, El Borge, Cártama, Casabermeja, Coín, Colmenar, Comares, Cútar, Málaga, Parauta, Periana, Pizarra, Rincón de la Victoria, Valle de Abdalajís, Villanueva de Algaidas y Viñuela. La documentación técnica justificativa de valores se redactó por personal especializado en antropología, con la colaboración fundamental de las pandas de verdiales. En el proceso de catalogación se delimitó un ámbito de desarrollo de la actividad, donde se incluyeron hitos de referencia de la Fiesta y el territorio de los Montes,

Fiesta de Verdiales. Choque de Pandas en los Montes (Eva Cote Montes, [Fondo Gráfico IAPH](#)).



todo ello registrado en un mapa etnográfico. Las medidas de salvaguarda fueron expresamente redactadas teniendo en cuenta a los grupos y pandas protagonistas, reconociendo a la Federación de Pandas como la entidad protagonista que debe señalar las actuaciones y directrices. Recogieron, asimismo, determinaciones respecto a la enseñanza, elaboración de un registro documental, creación de un Centro del Folclore de Málaga, la inclusión en los catálogos urbanísticos de los hitos geográficos señalados, etc.⁶

También integran este grupo las inscripciones como BIC en 2012 correspondientes a la Escuela Bolera de Baile y a la Escuela Sevillana de Baile, declaradas por sendos decretos, Decreto 521/2012, de 13 de noviembre, y Decreto 518/2012, de 6 de noviembre, respectivamente. En estos casos no se señaló ámbito de desarrollo ni medidas de salvaguarda, salvo un extracto de las líneas generales de la Convención de 2003.

En los procedimientos de La Zambomba de Jerez de la Frontera y la Zambomba de Arcos de la Frontera se implicaron ambas poblaciones y se hallaron las diferencias y especificidades. Consta solicitud, además, del Ayuntamiento de Jerez, fechada el 27 de diciembre de 2013. En 2015 fueron inscritos ambos rituales por Decreto 503/2015, de 9 de diciembre. En las instrucciones particulares se incluyeron artículos de la Convención citada, pero no se contempló ámbito ni espacio de desarrollo.

La Zambra del Sacromonte, vinculada a la declaración de la zona patrimonial del Valle del Darro, se inscribe mediante el Decreto 43/2017, de 14 de marzo. Solicitada la inscripción por la Plataforma ciudadana del Valle del Darro, el equipo técnico multidisciplinar que redactó la documentación técnica incluyó esta manifestación, aunque en el Decreto solo se alude de forma genérica a los documentos de la UNESCO y al patrimonio inmaterial incluido en el territorio.

El Fandango de la provincia de Huelva, en sus catorce modalidades registradas, constituye otro registro del Catálogo General relacionado con el flamenco. En el expediente se incluyeron las expresiones pertenecientes a Almonaster, Alosno, Cabezas Rubias, Calañas, El Cerro del Andévalo, Encinasola, Huelva capital, Minas de Riotinto, Santa Bárbara de Casas, Valverde y Zalamea. La solicitud partió, igualmente, de la iniciativa por documentar diversos palos

del flamenco de forma específica y se declaró BIC en 2020, a través del Decreto 92/2020, de 30 de junio. Durante el procedimiento se recibieron alegaciones de los Ayuntamientos de Encinasola y Zalamea, aportando datos complementarios a la documentación redactada por personal técnico en antropología, incorporando una nueva modalidad de fandango surgida en Encinasola. En las medidas de salvaguarda se determinó el fomento del estudio y la posibilidad de acceso a subvenciones.

3.2. Actividades relacionadas con oficios y saberes

En este grupo de bienes catalogados encontramos las primeras inscripciones de actividades de interés etnológico inscritas separadamente de un inmueble, como bienes de catalogación genérica, es decir, la segunda categoría que contemplaba la primera Ley de Patrimonio de Andalucía, equivalente a la actual de catalogación general. La primera de esta serie tuvo como objeto la actividad de carpintería de ribera de Coria del Río, Sevilla, inscrita mediante Resolución de 12 de septiembre de 2003. El procedimiento fue incoado a solicitud del acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Coria y del propio carpintero, concesionario del lugar, amenazada su supervivencia por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. También se recibieron apoyos de profesionales de la antropología, universidad y del Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla. Aunque la antigua ley de patrimonio andaluza no contemplaba el concepto de ámbito de desarrollo para las actividades, se señaló un espacio de desarrollo para el ejercicio del oficio artesanal, en la orilla del Guadalquivir, a continuación del lugar de trabajo, reconociendo la necesidad ante el vacío legal existente.

No obstante, cuando se inscribió, todavía con la legislación antigua de 1991, la carpintería de ribera de las playas de Pedregalejo, en Málaga, solicitada por los dueños del principal astillero, el de Nereo, también como bien de catalogación genérica, no se delimitó gráficamente un lugar específico de desarrollo de la actividad. Ubicada, al igual que la de Coria, en dominio del Estado, en este caso de Costas, se delimitó de forma literal: “El ámbito incluye lo que antiguamente se llamaba ‘la Barcaza’, que iba desde el ‘Arroyo de los Pilones’ hasta ‘La Carena’, lugar en el que se encuentran actualmente las actividades relacionadas con la carpintería de ribera, en las playas de



Astilleros Nereo en Málaga. Puesta en quilla (Eva Cote Montes, [Fondo Gráfico IAPH](#))

Pedregalejo”. Este hecho de no señalar un ámbito preciso ha dado lugar a numerosos conflictos legales e interpretaciones acerca de la protección de la actividad y de su ámbito físico necesario. Actualmente, en cumplimiento de una sentencia de los tribunales de justicia, ante la demanda de la carpintería de ribera de Astilleros Nereo, concesionario desde hace años de los terrenos, aunque no se le ha renovado la licencia de ocupación, la Administración cultural está revisando el procedimiento de inscripción para adaptarlo a las necesidades de salvaguarda y viabilidad de la actividad. La resolución de inscripción se hizo efectiva a través de la Orden de 19 de febrero de 2008.

La construcción naval de los astilleros en Puerto Real, Cádiz, se vinculó al procedimiento del lugar de interés etnológico, BIC denominado Dique de Matagorda, inscrito por la Orden de 19 de diciembre de 2001. El expediente se inició a solicitud de la factoría, en concreto, de parte de su archivero e

historiador, que colaboró en su documentación. En las instrucciones particulares se someten a autorización las actuaciones que puedan afectar a los bienes muebles e inmateriales, indicando que las actividades sobre su patrimonio inmaterial, preferentemente, deberán estar dirigidas a las labores de protección, investigación, conservación, restauración y difusión, constanding el interés de la protección de este lugar para la pervivencia de su memoria en las generaciones futuras, dados sus significados para Andalucía.

El cultivo de la huerta en Pegalajar, Jaén, fue un procedimiento pionero tramitado con la primera ley andaluza de patrimonio. Al lugar de interés etnológico, declarado mediante Orden de 4 de septiembre de 2001, se le vinculó la citada actividad. Se consideró la huerta, la fuente y la charca como principales elementos de un sistema vivo y en funcionamiento, donde se imbricaban todos los bienes, tal y como recogieron las instrucciones particulares, con el objetivo de continuar los cultivos y el aprovechamiento tradicional. Se dispuso la redacción de un plan especial, aunque nunca se llegó a aprobar por el Ayuntamiento, cuyas sucesivas Corporaciones han manifestado un desinterés inexplicable por este bien, tan relevante y peculiar, y con tantos significados simbólicos para muchas personas del vecindario. No obstante, el interés por la preservación de la huerta sigue arraigado en asociaciones vecinales, que fueron las que propiciaron el procedimiento de catalogación. La problemática ha trascendido de las competencias de cultura, ante la falta de agua y los conflictos por vertidos, etc.

En 2009, la elaboración artesanal de la cal en Morón de la Frontera (Sevilla) se integra en el procedimiento de inscripción de otro lugar de interés etnológico, BIC, denominado Caleras de la Sierra, protegido por Decreto 304/2009, de 14 de julio. La Asociación Hornos de Cal de Morón y el colectivo de caleros iban a realizar un video documentando la *última* hornada de cal artesanal. La Consejería de Cultura advirtió el interés de los bienes existentes y se contrató la documentación técnica redactada con la colaboración de los grupos protagonistas. No se incluyeron medidas de salvaguarda como tales, pero se tuvo en cuenta la actividad en las acciones de conservación, difusión, puesta en valor, etc., recogidas en las instrucciones particulares.

También en ese mismo año se inscribió la actividad del cultivo de la huerta en Cañaveral de León, Huelva, vinculada al lugar de interés etnológico, BIC,



La producción de cal, Morón, Sevilla. Reparando el horno (Alessandra Olivi, [Fondo Gráfico IAPH](#))

de El Ruedo, declarado por Decreto 89/2009, de 14 de abril. Las instrucciones particulares aludieron a los elementos físicos, con el objetivo de conservar la actividad de la huerta, estableciendo un régimen de autorizaciones. No se le señaló ámbito, dado que se delimita el lugar y un entorno.

En esta misma tipología encontramos los usos y conocimientos del reparto del agua en el Valle Darro, reconocida actividad vinculada a la zona patrimonial así denominada, declarada por la disposición que más arriba se reseña. Aunque se alude a la Convención de 2003, en este caso no se concretaron medidas específicas para el patrimonio inmaterial.

La Montería y la Rehala en Andalucía fueron inscritas como actividades mediante Decreto 107/2020, de 4 de agosto. La tramitación respondió a la solicitud de la Federación de Asociaciones de Montería y de Rehala, que

encargó la redacción de la documentación técnica a especialistas en antropología. Apoyaron la iniciativa mas de doscientos Ayuntamientos y varias Diputaciones andaluzas. La inscripción ha sido muy contestada por una treintena de asociaciones ecologistas y naturalistas, y sus federaciones, que mostraron su desacuerdo con la práctica y su protección, negando su carácter cultural, señalando el maltrato animal y el uso de los montes públicos. No se dotó de ámbito de desarrollo ni de instrucciones particulares a estas actividades, que, hasta el momento, no han sido encuadradas en la tutela habitual de los bienes culturales, dadas sus características y la normativa por la que se rigen, totalmente alejada, según entendemos, de la legislación y la competencia de la Administración cultural.

3.3. Actividades relacionadas con rituales festivos

Dentro de este ámbito podemos señalar el Carnaval de Cádiz, declarado como actividad de interés etnológico en 2019, a solicitud del Aula del Carnaval, la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento, como punto de partida para su inclusión en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Por Decreto 609/2019, de 10 de diciembre, se inscribe en el Catálogo General, incluyendo un amplio ámbito que comprende la totalidad de los barrios del Pópulo y la Viña, reconocidos e identificados como espacios para el Carnaval gaditano. En las instrucciones particulares se incluyeron medidas específicas relativas a la actividad y sus soportes materiales, además de otras consideraciones acerca de la actividad y su necesaria evolución. Participaron en la redacción tanto los grupos carnavaleros formalmente constituidos, como los *ilegales*, o informales.

La Fiesta de la Cruz de Mayo en Añora está protegida como BIC por Decreto 223/2021, de 14 de septiembre, atendiendo la solicitud del Ayuntamiento de la localidad. En la disposición se describe el ámbito de desarrollo, tanto en los espacios públicos, como en los privados, de forma muy completa, y en las instrucciones particulares se recogen medidas y recomendaciones acerca del patrimonio efímero, documental, el carácter de la participación y el reconocimiento a las mujeres cruceras, señalando que las actuaciones deben contar con su hacer y consentimiento, además de pedir que el Ayuntamiento informe y tenga constancia de la actividad, de sus medidas, etc.

La Representación de El Prendimiento en Priego de Córdoba cuenta con procedimiento iniciado por Resolución de 25 de enero de 2021, atendiendo una solicitud de la propia Hermandad de la Veracruz, Jesús de la Columna y María Santísima de la Esperanza, ejecutora de la escenificación anual. Tomando como base la documentación aportada por la entidad, de carácter histórico, se elaboró la documentación técnica justificativa de valores del expediente, incluyendo recomendaciones para su salvaguarda, muy generales, aunque se reconoce al grupo protagonista como depositario del ritual y encargado de organizar y realizar las actuaciones, según sus reglas.

En la provincia de Granada encontramos en este campo los rituales vinculados a la zona patrimonial del Valle del Darro, declarados actividad de interés etnológico en el procedimiento anteriormente citado: en este ámbito se

El Prendimiento de Priego. La Venta (Manuel Cano Pedrajas, Expediente de catalogación, Dirección general de Patrimonio Histórico y Documental)



incluyeron la Procesión del Cristo del Consuelo, la Romería de San Cecilio y la Romería del Cristo del Almecín, en Granada. No se determinaron medidas específicas para su salvaguarda, invocando las recogidas en la Convención de 2003, ni se señalaron ámbitos de desarrollo, más allá del que abarca la zona patrimonial en la disposición de resolución.

Aplicando la figura de bien de catalogación general, se produce la inscripción de la Fiesta del Santísimo de los Mosqueteros de Béznar, en Lecrín, Granada, mediante Orden de 22 de abril de 2019. Al no haber redacción de instrucciones o medidas de salvaguarda, dada la tipología de catalogación, se describe la actividad y el ámbito donde tiene lugar.

El ritual de El Cascamorras de Baza y Guadix también está inscrito como actividad de interés etnológico, BIC, por aplicación del Decreto 605/2019, de 3 de diciembre. En la disposición de inscripción se incluye un ámbito de desarrollo de las actividades en ambas poblaciones e instrucciones generales tomando como base la Convención de la UNESCO de 2003. El procedimiento se inició a solicitud de los Ayuntamientos donde radican las actividades y la iniciativa pretendía ser un paso para el reconocimiento por el Estado, como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial y, posteriormente, por la UNESCO, según se ha recogido en diversos medios de comunicación.

La Cabalgata de los Reyes Magos de Higuera de la Sierra, en Huelva, se inscribe como bien de catalogación general por Orden de 10 de junio de 2010. En la disposición se señala el ámbito de desarrollo en un plano. Aunque el procedimiento se inició de oficio, la documentación la redactó un especialista en antropología vinculado a la población y al grupo promotor y protagonista de la actividad ritual.

A continuación fueron inscritas catorce Danzas Rituales de la provincia de Huelva, bajo la misma figura de catalogación general. Los rituales incluidos en dicho procedimiento fueron: la Danza de los Cirochos, El Almendro, Villanueva de los Castillejos; Danza de los cascabeleros, Fandango Parao y Danza de San Antonio de Padua, en Alosno; Danza de las espadas, en Cabezas Rubias; Danza de las Lanzas, en El Cerro del Andévalo; Danza de la Virgen de la Esperanza y Danza del Corpus, en Cumbres Mayores; Danza



Orfebrería. Repujado. Armilla, Granada (Ana Belén García Muñoz, [Fondo Gráfico IAPH](#))

de la Virgen de la Tórtola, en Hinojales; Danza de Espadas, en La Puebla de Guzmán; Danza de las Espadas, en San Bartolomé de la Torre; Danza de la Virgen de la Rábida, en Sanlúcar de Guadiana; Danza de los Palos, en Villablanca y la Danza de Garrotes, en Villanueva de las Cruces. La documentación se realizó en contacto con los grupos protagonistas, aunque en la Orden de inscripción de las catorce danzas, de 22 de marzo de 2011, se señalaron ámbitos individuales de desarrollo de cada uno de los elementos inscritos.

El Ritual de la Esquila de Minas de Riotinto se vincula como actividad al expediente de la zona patrimonial de las Minas de Riotinto. El procedimiento se inició a instancias de la Fundación Riotinto, colaborando en la redacción de la documentación el personal técnico de la entidad solicitante, constituyendo la Esquila el único elemento inmaterial propuesto para proteger, dada su relación simbólica e identitaria con la minería. En el Decreto 504/2012, de 16

de octubre se incluyeron determinaciones respecto a los contextos espaciales del desarrollo de la manifestación y al registro en soporte del patrimonio oral-musical, así como recomendaciones de difusión. Se reconoció, como protagonista, a la población de Minas de Riotinto, lugar de la celebración.

Para terminar esta amplia representación del patrimonio festivo de la provincia de Huelva, nos referiremos al ritual del Corpus de Hinojos, inscrito como actividad de interés etnológico, BIC, respondiendo a la solicitud del Ayuntamiento de Hinojos. En el Decreto 91/2018, de 15 de mayo no se contempla ámbito, ni medidas de salvaguarda, aunque estaban incluidas en la documentación técnica que forma parte del expediente. No obstante, si se incluyó en el texto aprobado por Consejo de Gobierno la obligación de elaborar informes periódicos, por parte del Ayuntamiento y de las hermandades implicadas, acerca de los valores del ritual.

En la provincia de Jaén encontramos la inscripción de la Romería de la Virgen de la Cabeza, en Andújar, incluida en el Catálogo General mediante el Decreto 49/2013, de 16 de abril. Durante el procedimiento, iniciado de oficio por la Consejería, se recibieron alegaciones, entre otras, de: la Hermandad Matriz, puntualizando y recordando que la actividad a proteger es un hecho religioso y vivo, además de otros datos que se tuvieron en cuenta en la documentación que forma parte del expediente; el Obispado de Jaén, acerca de la titularidad de los bienes, el carácter religioso de la romería y otras consideraciones; la Consejería de Agricultura y Pesca, acerca de los caminos y rutas que se incluyen en el ámbito; las Peñas y el Ayuntamiento, acerca de los terrenos circundantes al Santuario de la Cabeza, incluidos dentro del ámbito de desarrollo de la actividad, donde se contempla la amplia franja de terreno que va desde la ermita hasta el centro de Andújar; así como distintas personas e investigadores. En las instrucciones particulares se determinaron criterios de aplicación al ámbito físico delimitado, prohibiendo edificaciones nuevas en el espacio de celebración central. También se fijaron las actuaciones en los bienes muebles, que incluyen a la Virgen de la Cabeza y a su ajuar, y a los documentos vinculados. Para la actividad se recogieron las determinaciones generales de la Convención de 2003.

El Corpus de Villacarrillo y Villardompardo, también en Jaén, está inscrito como actividad de interés etnológico, BIC, por el Decreto 164/2021, de 11 de

mayo. Se incluyeron instrucciones particulares específicas para el ámbito y los bienes muebles vinculados, así como para la actividad de forma genérica, aunque se reconoció la importancia de los grupos protagonistas y su actividad promotora en la transmisión, así como la capacidad de decisión de los citados para acordar los cambios pertinentes que requieran sendos rituales, al tratarse de una actividad viva. Igualmente, se requieren estudios e informes periódicos acerca de los valores.

3.4. Actividades relacionadas con el asociacionismo

En este apartado podemos incluir la Actividad asociativa y deportiva del Club Recreativo de Huelva y la Actividad asociativa y deportiva del Club Recreativo de Tenis, ambas radicadas en Huelva, declaradas BIC por el Decreto 139/2016, de 26 de julio. Ambos clubes solicitaron la inscripción en el Catálogo General ante los condicionantes desfavorables económicos en que estaban inmersos, totalmente fuera de las competencias de la Consejería de Cultura, aunque se aportó el reconocimiento legal como patrimonio inmaterial. Dadas las circunstancias, en las medidas de salvaguarda se recogen las generales de la ya citada Convención de 2003, incluyendo también el procedimiento a los bienes muebles y documentales de las entidades portadoras de la actividad.

Otra peculiar inscripción la constituye la de la Actividad Cultural de La Carbonería en Sevilla, vinculada al lugar de interés etnológico del mismo nombre, declarado por Decreto 73/2017, de 13 de junio. El procedimiento se inició ante la solicitud del representante de parte de la propiedad del inmueble, que fue avalada por numerosas firmas de la ciudadanía. No se incluyen instrucciones particulares ni ámbito, dado que se entiende que el espacio de desarrollo de la actividad es el inmueble declarado, que se reconoce como enclave de fomento de la sociabilidad y de la promoción cultural sevillana.

3.5 Actividades relacionadas con la habitación

Con esta tipología de actividades se inauguran las inscripciones del patrimonio inmaterial en el Catálogo General, aunque vinculada en este caso a un lugar de interés etnológico, considerado BIC, como el que constituye el

Corral de la Encarnación en Sevilla. Por Orden de 14 de marzo de 1995 se realiza la inscripción solicitada por el vecindario, la asociación de vecinos de corrales y el profesorado de antropología de la Universidad de Sevilla. Se recibieron alegaciones del Ayuntamiento y se aceptó quitar el entorno previsto para el inmueble. Posteriormente, el municipio se convirtió en propietario del inmueble y se realizaron viviendas nuevas, manteniendo la organización de los espacios y subiendo una planta para dar mas amplitud a las mismas. No ocurrió lo mismo con la casa tapón y el entorno suprimido, donde se aumentaron las alturas y quitaron luz al patio y a los nuevos hogares. En las instrucciones particulares se alude al patrimonio material, pero siempre como espacio contenedor de vivienda colectiva, tendente a perpetuar el uso como tal y la pervivencia de las doce familias que lo habitaban.

En el caso de la Habitación tradicional de la Casa del Pumarejo, también en Sevilla, igualmente inscrita como BIC, vinculada concretamente a un inmueble monumento, se inició el procedimiento a instancias de sus habitantes y asociaciones de la ciudadanía. Aunque el Ayuntamiento de Sevilla alegó ante la iniciativa de protección, considerando suficiente la calificación del inmueble recogida en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), años mas tarde compró el edificio. Actualmente, se ha aprobado el Proyecto de Rehabilitación, donde han participado de forma intermitente sus habitantes, pero siempre mediante reclamaciones de la ciudadanía ante la Gerencia de Urbanismo, al no haber cauces legales directos y obligatorios para ejercer la participación de forma eficaz y permanente. En la Orden de 26 de junio de 2003 se reconocen las actividades de habitación o residenciales, artesanales y comerciales, prohibiendo, expresamente, aquellas actividades que monopolicen el uso del edificio, evitando, así, los objetivos turísticos, hosteleros, etc.

3.6. Otras modalidades

Para finalizar, hemos de aludir al Sorteo de Hazas de Suerte del Común en Vejer de la Frontera, Cádiz, inscrito como actividad de interés etnológico por el Decreto 103/2020, de 21 de julio. El registro lo promovió el Ayuntamiento, y se elaboró por su propio equipo técnico, en colaboración con la Secretaría de la Junta de Hazas, con la perspectiva de su presentación también como candidatura de la UNESCO. En la inscripción se delimita



Sorteo de Hazas de Suerte de Vejer de la Frontera, Cádiz (Juan Carlos Cazalla Montijano, [Fondo Gráfico IAPH](#))

un ámbito, conformado por las hazas de suerte y el teatro donde se celebra el sorteo. Se introducen medidas enfocadas a reconocer el sorteo como actividad a proteger, que cuenta con sus propias normas, además del protagonismo del vecindario y de la Junta de Hazas. Se vinculan bienes muebles y documentales.

4. Conclusiones

Las inscripciones en el Catálogo General se han realizado, en gran medida, atendiendo a la demanda de sus protagonistas, que, frecuentemente, han colaborado en la redacción de los documentos técnicos que conforman los expedientes de protección. Dichos estudios son realizados por personal

especializado en antropología, que metodológicamente está preparado y formado para documentar de forma científica las actividades, así como para reconocer a sus grupos portadores. Los registros responden a iniciativas de Ayuntamientos y grupos, detectándose en su mayoría los valores identitarios y simbólicos que las expresiones inmateriales y sus bienes materiales vinculados suponen y significan.

Con dichos procedimientos administrativos se contribuye a la visualización, al reconocimiento y a la documentación del patrimonio, especialmente de su faceta inmaterial, fomentando la identidad andaluza y la pertenencia a una cultura propia y diferenciada.

Pero señalaremos que somos conscientes de la falta de diversidad tipológica de las actividades inscritas, existiendo abundancia de rituales y modos de expresión, aunque sin constituir una representación suficiente en cuanto a ámbitos temáticos y territoriales. Los oficios y saberes, quizás el ámbito mas necesitado de protección y toma de medidas de salvaguarda, están escasamente presentes en el Catálogo General, por lo que se debe continuar activando dichas inscripciones.

No obstante, las escasas competencias de la Consejería de Cultura, y la falta de coordinación existente entre los departamentos de la Junta como Economía, Medio Ambiente, Industria, Gestión del agua, Costas, Vivienda, etc., también con la administración local, dificultan enormemente la toma de medidas de salvaguarda eficaces para el patrimonio inmaterial inscrito, propiciando que sean adoptadas de forma experimental, con carácter puntual y no de manera continuada.

Es igualmente imprescindible la adecuación de la Ley de Patrimonio de Andalucía a las necesidades y características de los bienes del patrimonio etnológico, especialmente a los de carácter inmaterial.

También merece señalarse la necesidad de incluir cauces específicos de participación real de la ciudadanía en la normativa del patrimonio cultural, dadas las demandas de la ciudadanía y la obligatoriedad de la Administración en aras de la transparencia y la eficacia de sus servicios. En este sentido, la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía, tal como hemos expuesto, no nos

aporta ninguna práctica aplicable a nuestras necesidades de participación. Para tal fin, deben ser creadas plataformas mixtas administración-grupos protagonistas, formales e informales, para intervenir en los cauces de participación real, además de dotar a los servicios administrativos de personal especializado y competente en patrimonio inmaterial y etnológico.

Como resultado de los procesos participativos, se obtendrá mayor diversidad y representatividad en los registros, se enriquecerán las documentaciones, y los valores serán identificados, reconocidos y visibilizados, contribuyendo a la valoración y transmisión por parte de sus grupos protagonistas.

Actualmente, prevalecen los intereses políticos y técnico-administrativos en las actuaciones y decisiones sobre la catalogación en Andalucía, pero ya empieza a percibirse un cambio incipiente en la Administración cultural y las acciones ciudadanas van calando y haciéndose oír y respetar cada vez más, aunque queda todavía mucho camino por recorrer en este buen sentido. La gestión de la catalogación implicará siempre toma de decisiones y selección: mientras más consensuada sea esta, menos imperarán los intereses individuales de cualquier tipo y procedencia y más los intereses colectivos y patrimoniales.

Notas

1. Decreto 49/2013, de 16 de abril, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, la Actividad de Interés Etnológico denominada Romería de la Virgen de la Cabeza, en Andújar (Jaén).

2. El plazo para resolver los procedimientos de BIC y de Catalogación General es de 12 meses en el caso de inmuebles y actividades y de 18 meses en el caso de monumentos y jardines.

3. Para tales fines se han creado dos buscadores. Por un lado, el correspondiente a las *Consultas públicas previas a la elaboración de normativa* (Junta de Andalucía 2021a) y, por otro lado, el buscador creado para la consulta de los trámites de audiencia e información pública preceptivos: *Todos los documentos sometidos a información pública* (Junta de Andalucía 2021b).

4. En este contexto no se puede olvidar la identificación simbólica y el sentido de pertenencia que también existe por parte de muchos sectores de la ciudadanía en el

caso de los bienes inmateriales, interés que tampoco está reconocido legalmente ni da lugar al ejercicio de derecho alguno.

5. Estamos de acuerdo con Arjones Fernández (2015), cuando afirma, de forma rotunda, “no los hay, instrumentos para participar activamente en la gestión del patrimonio cultural”.

6. Sin embargo, tales instrucciones no ayudaron a resolver el conflicto que se planteó a la Administración cultural por parte de la Federación de Pandas de Verdiales y un centro de enseñanza de danza que quería impartir una determinada modalidad de verdiales, al margen de la opinión y práctica de sus ejecutores tradicionales. La docencia concreta estaba avalada por el Consejo Internacional de la Danza, adscrito a la UNESCO. Al darse la controversia en el ámbito de la enseñanza, además de la enseñanza privada, la Consejería de Cultura consideró que estaba fuera de su competencia administrativa y de la aplicación de su normativa.